



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Medellín, veintisiete de julio de dos mil veintiuno

S19-200

Proceso: ORDINARIO LABORAL- APELACIÓN
Demandante: **MARÍA DORAIDE FRANCO HERRERA**
Demandados: **JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ
JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE
ANTIOQUIA
PROTECCIÓN S.A.**
Radicado No.: 05001-31-05-009-2015-01549-01
Tema: pensión invalidez
Decisión: **CONFIRMA ABSOLUCIÓN**

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL**, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación formulado por la parte actora dentro del proceso de la referencia.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 15 del Decreto 806 expedido el 4 de junio de 2020, en consonancia con los acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 22** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA y ANTECEDENTES

1.1. LO PRETENDIDO

Pretende la demandante que tras declararse la nulidad de los dictámenes emitidos por las entidades accionadas, se condene a Protección S.A. a reconocer y pagar la PENSIÓN DE INVALIDEZ desde la fecha de estructuración de la enfermedad, junto con las mesadas adicionales de junio y diciembre, además de los intereses moratorios o subsidiariamente la indexación de las condenas, y las costas del proceso.

1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES, EXPUSO LOS SIGUIENTES HECHOS:

- ✓ Que nació el 7 de enero de 1964.
- ✓ Que actualmente se encuentra afiliada en Protección S.A.
- ✓ Que durante más de 17 años ha laborado en oficios varios.
- ✓ Que el 24 de marzo de 2011 fue evaluada por Protección S.A. asignándole una pérdida de capacidad laboral del 45.28% desde el 9 de febrero de ese año, teniendo como deficiencias las siguientes: fibromialgia, histerectomía en postmenopáusica, linfedema de MSI e hipertensión arterial.
- ✓ Que el 4 de agosto de 2011 fue calificada por la Junta Regional, que dictaminó una pérdida del 41.91% de origen común y con fecha de estructuración del 24 de marzo del mismo, cuyos diagnósticos fueron: hipertensión esencial primaria, carcinoma in situ de la mama, trastorno de dolor persistente somatomorfo, síndrome de linfedema pos mastectomía, trastorno de ansiedad.
- ✓ Que el 19 de septiembre la Junta Nacional mantuvo los hallazgos de su antecesor.
- ✓ Que mediante oficio del 24 de marzo de 2011 el fondo accionado le manifestó que NO ostentaba la calidad de inválida, razón por la que no era beneficiaria de la pensión deprecada.
- ✓ Que se ha incurrido en un retardo injustificado en el reconocimiento de la prestación por invalidez, que ha de sancionarse con el otorgamiento de los intereses moratorios.

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Controvirtieron las entidades demandadas el derecho pretendido. Inicialmente se pronunció la **Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia** indicando que cumplió con lo que le competía que era la emisión de una calificación con apego al correspondiente manual, dictamen que profirió ajustándose a los procedimientos técnicos, más no el reconocimiento de una prestación económica.

Posteriormente **Protección S.A.** señaló que eran ciertos los hechos relacionados con la existencia de las valoraciones mencionadas, así como su afiliación a tal fondo, aclarando que la calificación de la Junta Nacional databa del 19 de abril de 2012 y no del 19 de septiembre de 2007 como erradamente se plasmó en los hechos, y que en todo caso, según las múltiples evaluaciones efectuadas, la demandante NO ostentaba la calidad de inválida dado que en

ninguna de ellas la merma superaba el 50% de pérdida de capacidad laboral, razón por la que se tornaba improcedente el reconocimiento de una pensión.

Finalmente la **Junta Nacional de Calificación de Invalidez** contestó aduciendo que según se encontraba documentado, la actora realmente se desempeñaba como *repartidora de personal*, la que en un primer momento, 19 de septiembre de 2007, fue calificada pero única y exclusivamente en cuanto al origen del diagnóstico de fibromialgia sin determinar alguna merma. Posteriormente realizó algunas precisiones en torno a los organismos competentes para calificar de acuerdo a lo previsto en el art. 41 de la Ley 100 de 1993 y advirtió, frente a la segunda de las valoraciones, que ello ocurrió el 19 de abril de 2012 donde le asignó una pérdida de capacidad laboral del 41.91% por disímiles enfermedades que referencia, de origen común (antecedentes de carcinoma en mama izquierda; linfedema en miembro superior izquierdo; quiste submucoso en pliegue vocal derecho sin alteración funcional; histerectomía en edad postmenopáusica; diabetes mellitus no insulínica; hipertensión arterial; artrosis facetaria, espondilosis y discopatía L5 y S1; cervicalgia; fibromialgia y polineuropatía de pequeñas fibras). Enlista la historia clínica que en su momento valoró, así como los hallazgos obtenidos en una tercera calificación donde medió una valoración física interdisciplinaria realizada el 25 de febrero de 2016, especificando el puntaje asignado a cada diagnóstico, describiendo además las minusvalías, para concluir que la merma de la accionante para ese momento ascendió al 43.36%, inferior al 50% requerido, destacando que había cumplido con los presupuestos formales y sustanciales de la calificación. De otro lado, resaltó que para ese momento mediaban 6 dictámenes emitidos por entidades independientes entre sí, con cuerpos interdisciplinarios distintos, coincidentes en que NO se había producido un estado de invalidez. También indicó que era factible que se presentara una variación en las condiciones clínicas de la paciente que le generan un mayor detrimento en su salud, punto en el que se debía tener en cuenta que la simple diferencia temporal o inclusión de nuevas condiciones no documentadas con antelación, exoneraba a la junta de cualquier responsabilidad.

1.4. DECISIÓN PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia proferida el 20 de junio de 2019, el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, **ABSOLVIÓ** a las demandadas de la totalidad de pretensiones incoadas en contra por el demandante a quien condenó en costas, fijando como agencias en derecho la suma de \$100.000 a favor de cada una de las entidades llamadas a juicio.

Dentro del término concedido por la ley, la parte actora interpuso y sustentó recurso de apelación.

2. ARGUMENTOS

2.1. DEL JUEZ PARA ABSOLVER

Adujo que la parte actora no se había ocupado de exponer cual era el error en el que habían incurrido la entidades calificadoras, mucho menos lo había acreditado, ocupándose únicamente de cimentar la nulidad en la designación de un perito que efectuara un nuevo dictamen, cuya práctica NO se llevó a cabo, guardando silencio frente al requerimiento realizado por el despacho, asumiéndose como desistida su práctica sin ser objeto de recurso. Que bajo tal contexto, no podía modificar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral o la fecha de estructuración determinadas administrativamente, menos aún con apego a un historial clínico cuya valoración era un aspecto netamente técnico, que escapaba al resorte de su conocimiento.

Igualmente precisó que el dictamen allegado con posterioridad por la parte accionante, correspondiente a una valoración por parte de la Junta Regional de Invalidez, que surgió por una nueva solicitud de valoración, resultaba extemporáneo, aunado a que NO se trataba de una prueba técnica tendiente a enrostrar los desaciertos de los dictámenes que antecedían. Añadió que, en gracia de discusión, de entenderse como una prueba sobreviniente, aquella NO tendría la entidad valorativa dado que NO se encontraba en firme al ser impugnado por la actora ante la Junta Nacional.

Que en tal sentido, al NO ser derruidos los dictámenes allegados, NO era procedente otorgar la pensión deprecada.

2.2. RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA

Aduce que si bien solicitó ante el a quo una prueba pericial que éste decretó, lo cierto es que frente a la misma existió un desistimiento tácito dado que posteriormente, y con el lleno de todos los requisitos, la AFP realizó una nueva calificación, siendo remitido el caso a la Junta Regional frente a la que interpuso un recurso, que debía ser desatado por la Junta Nacional. Que esta prueba, la cual NO considera extemporánea por ser sobreviniente, la presentó antes de que se profiriera sentencia, por lo que considera que era deber del despacho, ante su existencia, suspender el proceso hasta tanto se manifestase la Junta Nacional. Considera que esta prueba

tiene *pleno derecho*, dado la competencia de la entidad que lo profirió, recordando que la firmeza de la misma dependía de la Junta Nacional, por lo que en su debido momento allegaría al tribunal información pertinente de este trámite, con la finalidad de que fuese valorada, aunado que en las pretensiones se solicitó lo que resultara probado *extra y ultra petita*.

Agrega que acorde con el principio de económica procesal, debía dársele plena validez a la prueba, claro está, teniendo en cuenta su firmeza una vez la Junta Nacional se pronunciara, acogiendo su contenido, revocándose la sentencia y reconociéndose la pensión de invalidez, dado que la accionante contaría con una merma superior al 50% y dentro de los tres años inmediatamente a la fecha de la estructuración de la enfermedad, acreditaría 50 semanas dado los periodos de discapacidad entre el día 180 y 360 del 21 de mayo de 2010 al 25 de abril de 2016, sin que tuviera sentido desgastar la justicia con hechos y pretensiones iguales cuando aquí se contaba con una prueba idónea para acceder a lo pedido.

2.3. ALEGATOS PRESENTADOS POR PROTECCIÓN S.A.

Solicita se confirme la decisión adoptada en primera instancia aduciendo que:

Debe resaltarse Honorables Magistrados que la señora Maria Doraide, fue calificada en 6 oportunidades, la primera vez mediante dictamen 43.080.725 realizado por parte de la Comisión Médica de la Compañía Suramericana de Seguros de Vida S.A., entidad con quien mi representada tenía contratado el Seguro Previsional, en el cual se determinó que la demandante, tenía una pérdida de capacidad laboral de 45,28% con una fecha de estructuración del 9 de febrero de 2011. Dictamen este que fue apelado por la demandante y que fue revisado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, mediante dictamen 36764 del 4 de agosto del 2011, en el cual se determinó que la demandante tenía una pérdida de capacidad laboral del 41,91%, con una fecha de estructuración del 24 de marzo de 2011. De igual forma, este último dictamen también fue apelado por la señora María Doraide y fue revisado por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, mediante dictamen 430807 del 19 de abril de 2012, el cual confirmó el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, otorgándole una pérdida de capacidad laboral del 41,91%, con una fecha de estructuración del 24 de marzo de 2011

Asimismo, resalto honorables magistrados que en el año 2014, la demandante inició nuevamente el trámite de calificación de su pérdida de capacidad laboral y en consecuencia fue remitida nuevamente a la Comisión Medico Laboral de la Compañía de Seguros de Vida Suramericana S.A., con quien Protección S.A. tiene contratado el Seguro Previsional, entidad que le dictaminó una pérdida de capacidad laboral de 34,73% con una fecha de estructuración del 24 de octubre de 2014, mediante dictamen 43080725 del 24 de octubre de 2014. Dictamen este que fue apelado por la demandante y que fue revisado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, mediante dictamen 56294 del 18 de septiembre del 2015, en el cual se determinó que la demandante tenía una pérdida de capacidad laboral del 43,36%, con una fecha de estructuración del 12 de noviembre de 2014. De igual forma, este último dictamen también fue apelado por la señora María Doraide y fue revisado por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, mediante dictamen 43080725 - 5970 del 02 de marzo de 2016, el cual confirmó el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, otorgándole 43,36%, con una fecha de estructuración del 12 de noviembre de 2014.

Nótese honorables magistrados que en las 6 oportunidades que ha sido calificado la señora María Doraide, todas las entidades han concluido que la demandante no es una persona inválida, por cuanto su pérdida de capacidad laboral no es del 50% o más.

No obstante, el juzgado 9 Laboral del Circuito de Medellín, en audiencia de conciliación hasta decreto de pruebas, decreto la práctica de un dictamen pericial, con el fin de que se le evaluara nuevamente la pérdida de capacidad laboral de la demandante por parte de la Universidad del CES, prueba que no se llevó a cabo, por el desinterés de la parte demandante en practicarla, por lo que se entendió desistida, decisión que hoy en día está en firme, por cuanto no se presentó recurso alguno en contra de esta decisión.

Así las cosas, la norma es muy clara y determina que quien tiene la carga de la prueba es la parte demandante, por la anterior era la señora María Doraide, quien debió demostrar dentro del presente proceso, con pruebas idóneas y contundentes, que cumplía con todos los requisitos exigidos en el artículo 38 de la ley 100 de 1993, para ser acreedora de una pensión de invalidez, situación está que no se demostró dentro del presente proceso.

Por lo anterior, y de conformidad con las pruebas que obran en el expediente, me permito solicitar al Despacho que se confirmé la sentencia de primera instancia, por cuanto la demandante no cumplió con el presupuesto básico para tener derecho a una pensión de invalidez, la cual es que se trate de una persona inválida, es decir, cuya capacidad laboral se haya disminuido en por lo menos el 50% de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993.

Por lo tanto, resulta ilógico y contrario a la ley condenar a mi representada a una pensión de invalidez, retroactivo, mesadas adicionales, intereses moratorios, indexación y costas del proceso

Por último, y en el remoto evento en que este Honorable Tribunal, le otorgue validez al dictamen aportado de forma extemporánea por la parte demandante, esto es, el dictamen 071349-2017 emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, de fecha 1 de febrero de 2018, debe resaltar que la demandante tampoco cumple con las 50 semanas, en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral, esto es, del 10 noviembre de 2014 al 10 de noviembre de 2017, por lo tanto, no es posible condenar a mi representa a pagar una pensión de invalidez a la parte actora.

3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA

De los argumentos esbozados por el Juez de primer grado en la providencia y lo señalado en la apelación, a juicio de la Sala el análisis inicialmente se contrae a determinar si es procedente acoger y/o valorar el dictamen allegado con posterioridad a la demanda y proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, denominado por el recurrente como prueba sobreviniente para efectos de examinar si la demandante le asiste derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez.

En caso afirmativo, se establecerá a partir de cuándo, estudiándose además la viabilidad de los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

4. CONSIDERACIONES

Conocedora es la Sala de la competencia que por Ley se asignó inicialmente a la comisión interdisciplinaria de la administradora de fondo de pensiones, para este caso Protección S.A. a través de la aseguradora designada para ello de acuerdo al seguro previsional, con la finalidad de evaluar el estado de invalidez de un afiliado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 142 del Decreto Ley 019 de 2012.

De existir discrepancias puede acudirse a las Juntas de Calificación de Invalidez, quienes conocen en primera (Junta Regional) y segunda instancia (Junta Nacional) respectivamente, órgano que define tres aspectos: origen, porcentaje de pérdida de capacidad laboral y fecha de estructuración de la invalidez, dictamen que debe contener los fundamentos de hecho y de derecho para su expedición, analizando los hechos que dieron lugar a la causación de la enfermedad o accidente de trabajo, según sea el caso, Junta que además indica las circunstancias de tiempo, modo y lugar dentro de las cuales sucedieron los hechos que la originaron, examinando además el DIAGNÓSTICO CLÍNICO de carácter técnico-científico, soportado en la historia clínica y ocupacional, con las ayudas de diagnóstico requeridas de acuerdo con la especificidad del problema, en cumplimiento de lo establecido en el MUCI o Manual Único de Calificación de Invalidez, vigente para la época de los hechos.

En éste sentido se destaca la importancia que tienen los dictámenes emitidos por las Juntas de Calificación de Invalidez, dado que éstos en principio constituyen el fundamento para que las entidades que administran el Sistema de Seguridad Social deciden sobre el reconocimiento y pago de determinadas prestaciones económicas a las que podría tener derecho el afiliado, sin que sea admisible, sin fundamento alguno, apartarse de su contenido, incluso un juez no estaría facultado para dictaminar en forma definitiva y sin el apoyo de especialistas en la materia, asuntos tan técnicos como la distribución porcentual que apareja determinada patología, toda vez que es un hecho que debe ser establecido científicamente, conocimiento que claramente escapa al resorte de las competencias de un operador jurídico.

Así las cosas, el dictamen que emite la Junta Nacional de Calificación de Invalidez como órgano de cierre no tiene ningún recurso, solamente existe la posibilidad de rebatir su contenido dentro de un proceso ordinario laboral, siendo ello la génesis de esta acción, escenario en el que, con razones atendibles, se intenta contrariar los conceptos que sobre el tema hayan emitido los órganos competentes. Por ello, tanto la parte actora como el a quo contaban con la opción de solicitar la realización de una pericia para efectos de analizar por quien fungiría como auxiliar de la justicia, el porcentaje aludido.

Incluso de tiempo atrás, como en las sentencias de radicación 29.328, reiterada en la 29.622 y 31.062, la Sala de Casación Laboral, al referirse al tema, señaló que no necesariamente el concepto de las juntas ata al juez, pues de lo contrario carecería de sentido la intervención de la jurisdicción laboral, por lo que el operador jurídico puede definir el estado de invalidez o los parámetros en que debe reconocerse la pensión objeto de controversia, acudiendo al apoyo de un ente especializado en la materia, al no contar con la potestad de dictaminar en forma definitiva, sin el apoyo de los conocedores de la materia, si un trabajador está realmente incapacitado o no y cuál es la etiología de su mal, como tampoco cuál es el grado de la invalidez, ni la distribución porcentual de las discapacidades y minusvalías.

Aclarado lo anterior y descendiendo al caso que ocupa la atención de esta Magistratura, tenemos que según las pruebas que militan en el plenario, antes de instaurar esta acción, la señora María Doraide Franco Herrera fue calificada en diversas oportunidades (que para ilustración del lector a continuación se reseñaran), con las que aquella presenta inconformidad pero sin explicar, como acertadamente lo destaca el fallador, en qué consistían las posibles falencias en que estaban incurriendo las entidades calificadoras, panorama bajo el cual, al parecer, simplemente parece considerar que su sintomatología y deficiencias ameritan el reconocimiento de una pensión de invalidez dado su imposibilidad para reintegrarse al ámbito laboral, solicitando así en el líbello genitor la designación de un *perito médico de la lista de auxiliares de la justicia* para que realizara una evaluación de su pérdida de capacidad laboral y estableciera el origen de su enfermedad y la fecha de estructuración.

Las siguientes son las calificaciones realizadas a la demandante, coincidentes todas en el origen, establecido como común, a saber:

ENTIDAD	FECHA DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE ASIGNADO	FECHA DE ESTRUCTURACIÓN	FOLIOS
PROTECCIÓN S.A. ¹	24 de marzo de 2011	45.28%	9 de febrero de 2011	112 a 115
JUNTA REGIONAL	4 de agosto de 2011	41.91%	24 de marzo de 2011	32 a 33, 125 a 127
JUNTA NACIONAL	19 de abril de 2012	41.91%	24 de marzo de 2011	13 a 16
PROTECCIÓN S.A.	24 de octubre de 2014	34.73%	24 de octubre de 2014	17 a 21
JUNTA REGIONAL	18 de septiembre de 2015	43.36%	12 de noviembre de 2014	147 a 152
JUNTA NACIONAL	2 de marzo de 2016	43.36%	12 de noviembre de 2014	154 a 163

Valga aclarar en este punto, que NO se pretendió la declaratoria de nulidad de la última de las calificaciones emitidas, dado que para el momento de radicación de la demanda, aún no se había

¹ A través de la Compañía Suramericana de Seguros de Vida S.A.

emitido. Quiere ello decir que adelantó diversos trámites administrativos de forma paralela al proceso ordinario laboral.

En todo caso, como se dijo, el escenario judicial, a diferencia del administrativo, Sí permite realizar cualquier debate en torno a la viabilidad de acoger o no lo que frente a un asunto especializado preceptuó el última instancia el órgano calificador competente. Incluso de acuerdo a lo normado en el art. 227 del Código General del Proceso, se permite a la parte que pretenda valerse de un dictamen, aportarlo en la respectiva oportunidad para pedir pruebas, oportunidad que para la actora no es otra que la presentación de la demanda.

Ahora, ciertamente en la audiencia de que trata el art. 77 del CPT y la SS, se realizaron algunas precisiones en torno a si eran las disposiciones del CGP o las del actualmente derogado CPC las que debían regir el decreto y la práctica de la prueba pericial, pero al margen de lo allí decidido, mal o bien, se sometió las valoraciones aportadas a un control judicial, con la finalidad de nutrirse el debate probatorio, designándose a la Universidad CES como perito para que brindara elementos de juicio en aras de determinar una posible equivocación de los evaluadores primigenios, pues, como se dijo, precisamente un operador jurídico debe valerse de especialistas en la materia para efectos de esclarecer hechos técnicos, de ahí que NO se espere del juez un análisis médico.

No obstante lo anterior, dicha experticia nunca se realizó. Incluso mediante auto del 25 de junio de 2018 se requirió a la parte actora para que realizara el trámite pertinente, otorgándosele un término perentorio de 20 días, so pena de entenderse que desistía de la prueba. Como ello no ocurrió, el 13 de diciembre de tal anualidad se fijó fecha de realización de audiencia pública de trámite y juzgamiento para el 20 de junio de la siguiente anualidad.

Ningún pronunciamiento realizó la demandante en dicho lapso. Sólo a través del recurso de alzada esclareció que su silencio y pasividad se debía a la existencia de un séptimo dictamen, correspondiente a la valoración realizada por la Junta Regional de Invalidez de Antioquia, documento que incorporó al plenario a través de memorial radicado el 19 de junio de 2018 mediante el cual *puso en conocimiento* del despacho su existencia.

Copia del mismo se aprecia a folios 245 a 248, dictamen que fuese realizado el 1 de febrero de 2018 oportunidad en la que se asignó a la señora María Doraide Franco Herrera una pérdida de capacidad laboral del 58.04% de origen común y con fecha de estructuración del 10 de noviembre de 2017, entidad que se apoyó en las previsiones de un manual diferente al que

primigeniamente sirvió de soporte para establecer los aspectos en mención, dado que esta vez se fundamentó en el Decreto 1507 de 2014. De su contenido se extrae que a través de tal valoración se estaba dirimiendo la controversia presentada por la calificación que antecedió, seguramente proveniente del fondo de pensiones, donde se dictaminó una merma del 44.45%, con la misma fecha de estructuración y origen.

En este orden de ideas, el problema real surge es con el acogimiento en esta instancia de la última de las valoraciones realizadas por la Junta Regional, pues bajo una mirada rápida del asunto, la demandante por fin superaría el margen del 50% establecido por el legislador para categorizarla como una persona inválida.

Sin embargo, dos situaciones puntuales impiden la prosperidad de dicha súplica. Veamos:

De un lado, el a quo entró en diversas disquisiciones en torno a la acepción de prueba extemporánea y prueba sobreviniente, otorgándole el primer calificativo a la incorporada *tardíamente* por el recurrente para negar su valoración. Cabe recordar que el operador jurídico debe apreciar las pruebas de acuerdo con las circunstancias de cada caso, aplicando las reglas de la sana crítica, en una clara expresión de la libre formación del convencimiento, tal y como lo señalan los Art. 60 y 61 del C. de P. Laboral y de la Seguridad Social, y ello es importante saberlo pues tal facultad le permite acoger uno u otro dictamen, fundamentando su determinación.

Incluso esta Sala podría avalar el pensamiento del fallador especialmente con una mirada un tanto disímil del tema, enfocándonos más bien en la materialización del debido proceso y derecho de contradicción por el hecho de que tal prueba NO tuvo la oportunidad de ser controvertida por las partes, no se incorporó al plenario, no se decretó su práctica de manera oficiosa, no se dio traslado a entidades convocadas a juicio. Desde esta arista, su valoración sin el agotamiento de tales facetas, incluso podría cimentar la configuración de una nulidad.

Sin embargo, inocuo se torna analizar si en efecto la prueba es extemporánea o sobreviniente y cuáles son las implicaciones de una u otra acepción de cara a su valoración, o indagar sobre lo que en este punto haya precisado la jurisprudencia, dado que dicho dictamen NO SE ENCUENTRA EN FIRME, óptica desde la que infructuosos serían los esfuerzos del recurrente por obtener su valoración, muchos menos para atacar los hallazgos de sus homólogos, ello sin tener en cuenta que para entonces se aplicaba un manual diferente.

Téngase en cuenta, conforme se aprecia a folio 250 del plenario, que este nuevo dictamen emitido por la Junta Regional fue objeto del recurso de reposición y en subsidio apelación justamente por la parte actora, escrito en el que, en síntesis, manifiesta su inconformidad con la fecha de estructuración asignada.

En tal sentido, no puede pretenderse el acogimiento de los hallazgos de la Junta Regional cuando los mismos precisamente están siendo o fueron controvertidos administrativamente. Y es que a hoy se desconoce cómo se desató el recurso de alzada, pues transcurridos casi dos años la parte actora NO se ocupó de arribar al plenario, como lo mencionó al sustentar su descontento con el fallo proferido, la determinación adoptada por el órgano de cierre, es decir, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, concepto que en todo caso, en la vía administrativa resultaría vinculante para Protección S.A.

De otro lado, en gracia de discusión, podríamos pensar en su incorporación oficiosa, claro está con apego a las facultades otorgadas por el legislador, analizando su conducencia, pertinencia, utilidad, y asegurándose, claro está, de no incurrir en vulneración al derecho de contradicción que le asistiría a la parte opositora. Empero, ni siquiera bajo ese esfuerzo, ello implicaría que en esta instancia encontraría eco las súplicas plasmadas en el líbello genitor, dado que el camino se vería truncado con otro gran obstáculo, pues NO reposa en el plenario una Historia Laboral actualizada que permitiese avizorar las semanas cotizadas por la demandante con posterioridad al ciclo de octubre de 2013, último período que aparece registrado en el historial impreso en junio de 2016, óptica desde la cual, teniéndose como fecha de estructuración el 10 de noviembre de 2017, ninguna semana cotizada tendría dentro de los 3 años inmediatamente anteriores, aspecto que impediría el reconocimiento de la pensión de invalidez conforme lo normado en el art. 1 de la Ley 860 de 2003.

Ahora, no pasa desapercibido para esta Sala la curiosa solicitud del recurrente, cuando menciona que en primera instancia se debió suspender el proceso, pese a que no existe causal legal que avale su posición de acuerdo a lo normado en el art. 161 del CGP², empero, por las mismas

² ARTÍCULO 161. SUSPENSIÓN DEL PROCESO. El juez, a solicitud de parte, formulada antes de la sentencia, decretará la suspensión del proceso en los siguientes casos:

1. Cuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se decida en otro proceso judicial que verse sobre cuestión que sea imposible de ventilar en aquel como excepción o mediante demanda de reconvención. El proceso ejecutivo no se suspenderá porque exista un proceso declarativo iniciado antes o después de aquel, que verse sobre la validez o la autenticidad del título ejecutivo, si en este es procedente alegar los mismos hechos como excepción.

2. Cuando las partes la pidan de común acuerdo, por tiempo determinado. La presentación verbal o escrita de la solicitud suspende inmediatamente el proceso, salvo que las partes hayan convenido otra cosa.

PARÁGRAFO. Si la suspensión recae solamente sobre uno de los procesos acumulados, aquel será excluido de la acumulación para continuar el trámite de los demás.

También se suspenderá el trámite principal del proceso en los demás casos previstos en este código o en disposiciones especiales, sin necesidad de decreto del juez.

razones antes expuestas, de haberse encontrado precedente la paralización del trámite, ningún efecto útil tendría.

Mucho menos se puede considerar la opción de modificar la fecha de estructuración, cuando ello ni siquiera ha comportado un problema jurídico, por lo menos NO en el trámite judicial, y esa oficiosidad del operador o su labor para obtener esa verdad real sobre la verdad procesal, NO puede llegar al punto de acoger el ropaje del litigante, indagando si está o no correctamente definida a la luz de lo previsto en el art. 3 del Decreto 1507 de 2004³, cuando en parte alguna de esta instancia se ha mencionado un posible error o destacado alguna situación puntual frente al tema.

Estas razones llevan a la Sala a mantener incólume la decisión atacada. Se condenará en costas en esta instancia a la parte actora por no haber tenido éxito en el recurso. Se fijaran como agencias en derecho la suma de \$50.000 a favor de cada una de las entidades accionadas.

5. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

DECIDE

PRIMERO: CONFIRMA la sentencia proferida el 20 de junio de 2019 por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso ordinario laboral promovido por la señora **MARÍA DORAIDE FRANCO HERRERA** identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 43.080.725 contra la **JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA y PROTECCIÓN S.A.**, conforme las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

³ "se entiende como la fecha en que una persona pierde un grado o porcentaje de su capacidad laboral u ocupacional, de cualquier origen, como consecuencia de una enfermedad o accidente, y que se determina con base en la evolución de las secuelas que han dejado estos. Para el estado de invalidez, esta fecha debe ser determinada en el momento en el que la persona evaluada alcanza el 50% de pérdida de la capacidad laboral u ocupacional. Esta fecha debe soportarse en la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica y puede ser anterior o corresponder a la fecha de la declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral. Para aquellos casos en los cuales no exista historia clínica, se debe apoyar en la historia natural de la enfermedad. En todo caso, esta fecha debe estar argumentada por el calificador y consignada en la calificación. Además, no puede estar sujeta a que el solicitante haya estado laborando y cotizando al Sistema de Seguridad Social Integral."

SEGUNDO: costas en esta instancia a cargo de la demandante. Se fija como agencias en derecho la suma de \$50.000 a favor de cada una de las entidades accionadas.

Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en Auto AL2550-2021.

(Firmas escaneadas)

Los Magistrados,



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Proceso: ORDINARIO LABORAL- **APELACIÓN**
Demandante: **MARÍA DORAIDE FRANCO HERRERA**
Demandados: **JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ
JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE
ANTIOQUIA
PROTECCIÓN S.A.**
Radicado No.: 05001-31-05-009-2015-01549-01
Decisión: **CONFIRMA ABSOLUCIÓN**
Fecha de la sentencia: **27/07/2021**

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/100> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 28/07/2021 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario